JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C., dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés

Acción de Tutela No. 110014003010 2023 00759 01

Resuelve el juzgado la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido el 11 de agosto 2023 por el Juzgado Décimo Civil Municipal de esta ciudad, en la acción de tutela promovida por Yecyd Alfonso Pardo Villalba contra el Partido Alianza Verde, trámite al cual, se vinculó el Partido Político la Fuerza de la Paz, el Partido Político Conservador, la Veeduría Ciudadana del Partido Alianza Verde, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Registraduría Municipal de Fusagasugá, el Consejo Nacional Electoral, el Concejo Municipal de Fusagasugá, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, la Personería de Bogotá, la Personería Municipal de Fusagasugá, la Asamblea de Cundinamarca, la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca, el Comité Departamental de Seguimiento Electoral de Cundinamarca, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el Director de Asuntos Municipales de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, el Comité Departamental Cundinamarca del Partido Verde, el Comité Nacional del Partido Verde, los señores Sandra Milady Riveros, Rene Ballen, Pedro Tautiva, Omar Riveros.

1. ANTECEDENTES

1.1. Yecyd Alfonso Pardo Villalba promovió acción de tutela reclamando la protección constitucional de los derechos fundamentales del debido proceso y derechos políticos, y solicitó que tuteladas las aludidas garantías superiores:

“(...) se revoque el coaval otorgado a la señora Sandra Milady Riveros”.

“Que se estudie y avale las postulaciones de los candidatos a la alcaldía de Fusagasugá correctamente inscritos dentro de los términos legales, para la entrega de referido aval o se deje en libertad la militancia para escoger candidato y hacer proselitismo político por otros candidatos, incluida la señora Riveros y no se entregue aval o coaval en esta oportunidad para ningún candidato a la alcaldía en el municipio de Fusagasugá con el fin de la (sic) menos proteger los derechos políticos de la militancia del partido Alianza Verde en Fusagasugá”.

1.2. En apoyo de sus pretensiones el actor expuso que es militante del Partido Alianza Verde; acogiéndose a las reglas internas del partido realizó solicitud de aval para participar como candidato a la alcaldía de Fusagasugá, para

lo cual debía hacerse la inscripción y postulación a través de la página web del partido, y de acuerdo con los plazos fijados por el mismo, para realizar las postulaciones y solicitudes en el caso de alcaldías, el plazo vencía el 17 de julio de 2023; no hubo consenso en la elección del candidato a avalar estando la votación dividida entre Sandra Millady Riveros y el aquí actor.

Fue sorpresiva la postulación de Sandra Millady Riveros *“quien es conocida por ser parte de la diligencia (sic) departamental del partido Colombia Renaciente, del partido La Fuerza de la Paz y ahora último, avalada por el partido Conservador para la alcaldía de Fusagasugá”*

Al revisar las postulaciones se evidencio que Sandra Millady Riveros lo hizo en el partido Alianza Verde para el concejo municipal de aquel municipio *“no obstante, el partido violó el debido proceso de los militantes y postulados al aval (sic) de la alcaldía de Fusagasugá y a consideró (sic) para esta última, es decir como precandidata para la alcaldía de Fusagasugá”*.

El comité nacional de avales decidió *“entre lunes y martes de la presente semana”* otorgar coaval para aspirar a la alcaldía del mentado municipio a la señora Riveros, quien es militante de otros partidos, está avalada por otros partidos y solicitó aval para el concejo municipal de Fusagasugá en Alianza Verde, violando el debido proceso al actor y a los otros 3 postulados, así como el de los militantes de dicho partido al tener que hacer proselitismo, según la normatividad, por una persona que no es del partido Alianza Verde, y que al ingresar este partido hizo una postulación para el concejo municipal pero no para la Alcaldía.

1.3. Admita la acción de tutela, se pronunciaron: el Partido Alianza Verde, Sandra Millady Riveros Barbosa y el Partido Conservador (oponiéndose a la misma), Pedro Tautiva y Jorge Mario Torres Carmona (para coadyuvar las pretensiones del accionante); el Consejo Nacional Electoral, la Personería de Bogotá, el Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, el Consejo Municipal de Fusagasugá, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Municipal de Fusagasugá y el Partido Político la Fuerza de la Paz (alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva).

1.3.1. La Veeduría del Partido Alianza Verde, la Personería Municipal de Fusagasugá, la Asamblea de Cundinamarca, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, el Comité Departamental de Seguimiento Electoral de Cundinamarca, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el Director de Asuntos Municipales de la Secretaría de

Gobierno de Cundinamarca, el Comité Departamental de Cundinamarca del Partido Verde, el Comité Nacional del Partido Verde: guardaron silencio.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El juzgado de primera instancia, negó el amparo, tras considerar que como el ordenamiento jurídico confirió a los partidos y movimientos políticos la potestad para crear sus propios estatutos y reglas para otorgar los avales a los aspirantes a cargos de elección popular, y en el caso del Partido Alianza Verde, este contempló en sus estatutos que sería la Dirección Nacional la única facultada para expedir avales, ello, en el marco de su autonomía, siendo en ese orden una atribución originada en un consenso político y en las bases fundantes de la colectividad, por lo que no había lugar a exigírsele documento alguno en el que motivara la decisión de otorgar el aval, en este caso a Sandra Millady Riveros Barbosa, y negarlo al accionante. Por lo tanto, si éste no estaba de acuerdo, contaba con la posibilidad de controvertir la decisión ante el Consejo Nacional Electoral de conformidad con el artículo 7 de la Ley 130 de 1994.

Así las cosas, no es posible dispensar el amparo, pues persigue dejar sin efecto una determinación amparada en la autonomía reconocida a las colectividades políticas, amen de que al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en las decisiones propias de los partidos políticos.

Frente a la presunta vulneración del debido proceso, anoto el juzgador de primer grado, respaldado en un pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, que, no se advertía su vulneración porque la determinación fue adoptada con observancia de los estatutos, y el aval corresponde a una decisión discrecional del partido accionado.

3. LA IMPUGNACIÓN

En tiempo el accionante impugnó la decisión de primera instancia, argumentando que las razones que llevaron a interponer la acción de tutela fue porque se violaron las reglas expedidas por el partido Alianza Verde en el marco de su autonomía e independencia para expedir los avales, la cual no es absoluta, sino que esta supeditada al cumplimiento de la Constitución y la Ley, por lo que no puede el partido, al abrigo de esa discrecionalidad y autonomía saltarse las reglas impuestas, de ahí la vulneración del debido proceso.

Alega que el juez de primera instancia se equivoca al concluir que las reglas del debido proceso no le caben al presente asunto, pues las reglas para el

otorgamiento de avales por el partido Alianza Verde se hicieron con parámetros expedidos por el mismo partido siendo obligatorias para los interesados, y en ese orden son públicas y de estricto cumplimiento.

Considera el censor que el juzgado de primer grado omitió el análisis de las reglas del debido proceso y concluyó de manera errónea que esas reglas, o no procedían o estaban cumplidas, incurriendo en un error de apreciación. De suerte que para el otorgamiento de avales los partidos políticos deben acatar la constitución, la ley y sus propios estatutos, y de no hacerlo se violaría el aludido derecho.

Agregó que la acción de tutela se presentó el 27 de julio de 2023, antes de la inscripción de las candidaturas ante la Registraduría, por tanto, para la fecha de presentación de la acción, el único mecanismo legal que tenían para proteger sus derechos fundamentales vulnerados era la acción de tutela.

Apuntó que, con la tutela, no busca obtener un aval para una aspiración personal, sino que se suspenda el aval en lo que tiene que ver con el partido Alianza Verde para la alcaldía de Fusagasugá en lo que tiene que ver por el partido Alianza Verde para la alcaldía de Fusagasugá por violación a derechos fundamentales constitucionales en su expedición.

En consecuencia, solicito se revoque el fallo de la primera instancia y en su lugar se acceda a la petición de *“suspender el aval otorgado por el partido Alianza Verde a la señora Sandra Millady Riveros para aspirar en nombre de esa colectividad a la alcaldía municipal de Fusagasugá Cundinamarca, SOLO en lo que tiene que ver con el partido Alianza Verde y mantener el aval de los otros partidos políticos que la coavalan.”*

4. CONSIDERACIONES

4.1. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 tiene como fin primordial la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales en caso de amenaza o violación de los mismos por las autoridades públicas o los particulares, resultando improcedente cuando exista otro medio o mecanismo de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (Art. 86 C. P. y Decreto 2591 de 1991).

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la acción de tutela *“sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”*. Esta disposición, fue reproducida por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,

que además dispuso que la eficacia de los medios judiciales alternos será apreciada en cada caso en concreto.¹

4.2. Sobre el perjuicio irremediable, igualmente la jurisprudencia constitucional ha dicho que "... *Un perjuicio se califica como irremediable cuando es (i) cierto e inminente, es decir, que no se deba a meras conjeturas y que amenaza o está por suceder; (ii) de urgente atención, lo que significa que la medida que se requiera para conjurar el perjuicio ha de adoptarse a la mayor brevedad con el fin de que evitar que se consume un daño irreparable, y (iii) grave, pues no basta con la presencia de cualquier perjuicio, sino que el mismo ha de ser relevante, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona*² .

Ahora, sobre el mecanismo ordinario de defensa, la misma jurisprudencia ha señalado que éste ha de ser idóneo para alcanzar una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o vulnerado, lo cual implica que tenga la aptitud suficiente para que a través de él, se restablezca el derecho vulnerado o se rechace su amenaza.

4.4. En este caso, tras una revisión de la actuación, el panorama fáctico que plantea la acción de tutela deja ver su improcedencia por infracción del requisito de subsidiariedad, propio de esta acción de amparo, lo que traduce que no pueda abrirse paso el amparo implorado por el actor constitucional, en tanto que este mecanismo, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional en diferentes pronunciamientos y campos, no resulta procedente utilizarlo como mecanismo definitivo de defensa, pues para ello, previamente ha de acudir o agotarse los mecanismos ordinarios de defensa, previsto en la ley o en los propios reglamentos, salvo que se invoque, como ya se dijo, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En un caso con algunas similitudes, traído a colación por el juzgador de primer grado sobre el cual, y mencionado por el actor en su impugnación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, determinó la improcedencia de la acción cuando se cuente con otras vías o caminos de defensa. Dijo esa Sala de Casación que "...*la intromisión del juez de tutela resulta contraria a la autonomía constitucionalmente otorgada a las colectividades políticas, porque sus atribuciones y decisiones están amparadas bajo su discrecionalidad, pues es a la colectividad política en el marco de la dinámica de la democracia, a quien le corresponde evaluar sobre el otorgamiento o la revocatoria de un aval*"

¹ SU-316-2021

² Sentencia 1'-252 de 2005, M.P. CJara Inés Vargas Hernández

“Adicionalmente, incluso si se considerase que la acción tutela es mecanismo procedente para exigir el otorgamiento de un aval o rectificar la revocatoria de uno conferido, es necesario analizar que los derechos invocados no han sido vulnerados.”³

4.5 En ese orden de ideas, lo que quiere significar este despacho es que, más allá de alegarse vulneración del debido proceso y su falta de análisis por el juzgado de primer grado, lo que aui no se observa satisfecho es el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, lo cual descarta cualquier otro análisis, pues el actor constitucional contaba con otras vías o instrumentos para la defensa de sus intereses, como son (i) haber elevado la queja ante la Comisión Nacional de Avales al interior del Partido Alianza Verde que tiene dentro de sus potestades, estudiar y revocar avales, otorgados en cualquier momento, por falsedad en la información, o por violación de la constitución, la ley y los estatutos.

El artículo 17 de los Estatutos dice .

ARTÍCULO 17. Discrecionalidad para el Otorgamiento del Aval. La Comisión Nacional de Avales, se reserva la facultad de otorgar o no aval a un o una candidata, y gozará de absoluta discrecionalidad para la toma de sus decisiones. Así mismo, gozará de la facultad para revocar el aval otorgado en cualquier momento, cuando se demuestre falsedad en la información aportada o se viole la Constitución, la Ley o los Estatutos del Partido.

PARÁGRAFO. La Dirección Nacional puede abstenerse de tramitar las solicitudes de aval, que no hayan sido tramitadas de acuerdo a lo señalado en la presente Resolución.

(Registro digital 014 pág. 18 C-1)

También contaba con la posibilidad de impugnar dicha determinación ante el Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 130 de 1994, el cual prevé:

“(…) Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas”.

*“Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la respectiva designación. **El Consejo Nacional Electoral***

³ Sentencia sala casación Mp Eyder Patiño Cabrera STP 12364-2015

podrá, de oficio o a solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él. (subrayado fuera de texto)⁴

Luego si se contaba con otros mecanismos, previamente preestablecidos que debieron agotarse antes de hacer uso de la tutela, que no por su premura la hacían procedente.

En consecuencia, es por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, que, en criterio del juzgado resultaba improcedente la acción, punto por el cual inició el estudio el juzgador de primer grado, lo que se mostraba suficiente, descartando cualquier otro análisis o estudio.

Mírese que el juez constitucional no está llamado a desplazar la competencia de otras instancias y autoridades, de ahí la importancia de este requisitos.

La Corte Constitucional ha tiene dicho que

“en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional. En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 superior. Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en

⁴ Ley 130 de 1994

cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo. (Sentencia T-480 de 2022)

5. CONCLUSIÓN

En estas condiciones la sentencia impugnada habrá de MANTENERSE, por desconocimiento del principio de subsidiaridad, y tomando en cuenta que no se acudió a esta acción invocando su interposición transitoria, para evitar un perjuicio irremediable.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

6.1. CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2023 proferida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá.

6.2. NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO
Fallo 2 inst T-2023-00759-01

Ysl.